



▶ 20 Marzo, 2022

Más de 3.500 catalanes tienen derecho a recursos asistenciales que no reciben

Las personas con discapacidad intelectual soportan listas de espera de diez años

DOMINGO MARCHENA
 Barcelona

Todo tiene un límite. También la paciencia. Numerosos representantes de las entidades que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual han dicho basta. La injusticia de la situación ha desbordado ya todos los diques. Según la Generalitat, más de 3.500 personas del colectivo tienen derecho a urgentes recursos asistenciales que no reciben. Las listas de espera pueden superar los diez años.

Pero no es solo una cuestión de justicia, sino de sentido común, dice Carles Campuzano, director de Dincat. Esta plataforma, que agrupa a 300 entidades sociales y defiende los derechos de más de 40.000 personas, es la principal representante de quienes tienen discapacidad intelectual en Catalunya. Carles Campuzano subraya la contradicción de que “haya plazas asistenciales sin personas y personas sin plazas”.

¿Cómo se ha llegado a esta situación kafkiana? “Las personas a la espera de una plaza y sus familias –denuncia Dincat– están angustiadas. Y no es para menos: se inscriben en una lista por una necesidad y por un derecho que les corresponde, y no saben cuánto tendrán que esperar. Es absurdo: las entidades han hecho un esfuerzo con recursos privados para crear nuevas plazas y la administración no las concierta, no invierte”.

Se da así esa paradoja de pla-



Un taller ocupacional en un centro para personas con discapacidad intelectual

AURIA FUNDACIÓ

zas sin personas y personas sin plaza en un sector con esperas muy largas para acceder a una residencia, un hogar residencial o para recibir ayuda domiciliaria. La Generalitat admite demoras de hasta 10 años, pero este periódico ha publicado casos de familias que esperan desde hace más de 16. Y no esperan una ayuda concedida por sorteo, sino un recurso que es suyo.

“No queremos caridad, exigimos dignidad”, resume Carles

Campuzano. “No queremos más buenas palabras del Govern, sino un compromiso claro y firme”, agrega. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, participó en el 2020 en un encuentro con familiares y personas con discapacidad intelectual. Aragonès, que entonces era vicepresidente, reconoció sentir “vergüenza” y “sonrojo”.

Aragonès admitió también que Catalunya está lejos de los objetivos de la Convención so-

bre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ONU en el 2006. Desde que hizo estas declaraciones han pasado dos años y todo sigue igual. Ello ha motivado que un total de 34 gerentes, directores y representantes de entidades sociales hayan difundido a través de *La Vanguardia* la dura respuesta de esta misma página.

La falta de financiación estrangula a instituciones sin ánimo de lucro, afectadas por los

recortes, las congelaciones, el incremento acumulado de los gastos y del coste de la vida. En el 2019 hubo incrementos, pero insuficientes. En el 2021 no los hubo y tampoco los habrá este año. En total, la subida de las ayudas no llega ni al 3,8% de media en diez años. En ese periodo, sin embargo, los gastos crecieron un 21,3%.

Y a todo eso hay que añadir la burocracia y la falta de transparencia. ¿Un ejemplo? Las familias ignoran el criterio de asignación de plazas de la administración. Si lo supieran, la espera sería más tolerable y podrían calcular cuándo llegará su turno. Los candidatos denuncian una absoluta “falta de información sobre el sistema de asignación de plazas y sobre las que

Los gastos de las entidades sociales que atienden al colectivo han crecido un 21,3%; las ayudas, un 3,8%

quedan vacantes”, lo que aumenta su “incertidumbre”.

La lista de agravios continúa. Un millar de personas esperan acceder a los servicios de atención diurna. Los centros de desarrollo infantil y atención precoz también están saturados. Los niños con necesidades especiales tardan cada vez más en ser atendidos, aunque en su caso una respuesta rápida es esencial. Nada nuevo bajo el sol. Lo que sí es nuevo es el grito de entidades como Dincat, que reclama que Catalunya sea “una sociedad realmente inclusiva”. El peso de la defensa de las personas con discapacidad intelectual recae en entidades sin ánimo de lucro que día a día se reafirman en su compromiso, pero han lanzado un SOS: “Queremos trabajar con dignidad”.